

EL PROBLEMA DE LA FINANCIACIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA

UGT-PV
GRUPO I CES-CV

Mucho se ha escrito ya sobre el problema que el conjunto del sistema de financiación de las Comunidades padece, pero en el caso valenciano la situación es de tal gravedad e injusticia que nunca será bastante cuanto sobre el particular se redunde.

La España centralista de la dictadura ya suponía un reparto desigual de los recursos en el territorio. Los ratios de colegios, hospitales, inversiones y otros gastos del Estado por habitante reflejaban cifras profundamente desiguales que al llegar la democracia y producirse el reparto de competencias, puso en evidencia ese reparto del gasto y la inversión desigual. Así pues, la Comunitat Valenciana partía de una realidad de insuficiencia que el sistema autonómico perpetuó, de manera tal que es del todo falso atribuir a la descentralización operada con la Constitución del 78 los problemas de financiación que el sistema acarrea. Por el contrario, la toma de conciencia de esa infrafinanciación y la existencia de centros de poder territoriales deben ser la solución al problema por la toma difusión de la referida realidad y por la obligación de tales poderes en defender un trato justo para garantizar en grado de equidad la prestación de servicios básicos a sus ciudadanos.

En nuestro caso, el desconocimiento sobre la realidad de nuestra infrafinanciación tal vez sea el mayor hándicap a superar. Tanto los ciudadanos valencianos como la práctica totalidad de los españoles han venido considerando a la Comunitat Valenciana como una Comunidad Autónoma rica. A ello obedece sin duda la existencia de una agricultura enormemente productiva y diversificada, una industria tradicional presente con fuerza en buen número de sectores y un turismo potente que ha trasladado ese imaginario de tierra de oportunidades capaz de atraer a buen número de habitantes desde otras regiones limítrofes.

Pero aunque todo eso es verdad y tales oportunidades han permitido que en un territorio relativamente reducido se concentren cinco millones de habitantes, lo cierto es que la capacidad de prestar servicios de calidad en educación, sanidad y servicios sociales es claramente inferior a la media, y que las posibilidades de apoyar el necesario cambio de modelo productivo basado en la innovación está tan limitado

por la infrafinanciación y los gastos en atender esos servicios esenciales que no existe margen presupuestario para desarrollarlo.

La consecuencia de esta realidad se pone en evidencia con algunos datos incontrovertibles: la media de los salarios en nuestra Comunitat es inferior a la media española, porque la mayoría del tejido productivo es de escaso valor añadido; la cuantía de las pensiones es también inferior a la media porque bajos salarios determinan bajas cotizaciones, y la renta per cápita de los ciudadanos valencianos está 12 puntos por debajo de la media estatal.

Somos por tanto, una Comunidad Autónoma empobrecida que debiera recibir recursos por encima de la media para recuperar el terreno perdido y poder prestar los servicios esenciales que conforman el Estado del Bienestar en términos similares al resto del país. Sin embargo, no sólo no percibimos recursos por encima de la media, ni tan siquiera en la media, sino que nuestra situación es tristemente única en el sistema: somos los únicos que aportamos a la solidaridad del sistema recursos que necesitamos y que van a financiar a otras Comunidades no siempre más pobres o incluso ricas. Porque la perversidad del sistema supone que Comunidades con renta por encima de la media reciban más de lo que aportan. En el sistema caben cuatro posibilidades en las que estar situados, dos lógicas: Comunidades ricas que aportan más de lo que reciben y Comunidades pobres que reciben más de lo que aportan; luego hay un caso anómalo de Comunidades que aun siendo ricas reciben más de lo que aportan y un caso único, la Comunitat Valenciana, la única Comunidad que siendo pobre aporta más de lo que recibe.

Esta insólita situación es la que hace especialmente urgente que el sistema de financiación, sobradamente caducado, se acuerde y ponga en marcha cuanto antes y que, mientras tanto, se atienda la situación de nuestra Comunidad asignándonos los 1.325 millones de euros que el Conseller y los expertos estiman nos situarían en la media.

La crisis económica ha destapado con toda su crudeza una infrafinanciación que se paliaba con elevados ingresos vinculados a la actividad económica y en especial a la burbuja inmobiliaria en los tiempos de bonanza, pero que seguía produciendo déficit en nuestras cuentas públicas a pesar del crecimiento. Nuestra Comunitat no ha gastado más que la media, nuestros gastos por habitante en educación, sanidad o servicios sociales ha sido inferior y aun así hemos acumulado una deuda por la infrafinanciación que supera los 20.000 millones de euros de un total de 45.000

millones, que es imposible saldar y hacer compatible con un Estado del Bienestar en nuestra Comunitat que no nos convierta en ciudadanos de segunda. Es por tanto necesario insistir en la necesidad de condonar esa deuda acumulada como consecuencia de la infrafinanciación. No se trata de premiar a los incumplidores con esa condonación, como aducen algunos dirigentes de Comunidades Autónomas mejor tratadas por el sistema, sino de hacer justicia con quienes hemos venido padeciendo un trato desigual que además de restar calidad y cantidad a nuestros servicios esenciales y oportunidades, ha producido una deuda que no es posible saldar sin menoscabo de esos mismos servicios y oportunidades.

Capítulo aparte merece el referido a las inversiones del Estado en nuestra Comunitat, también claramente por debajo de lo que nos correspondería por población y que ha venido aplicándose de manera reiterada. Entre las infraestructuras más demandadas está el corredor mediterráneo, imprescindible para el desarrollo de una economía como la valenciana con fuerte vocación exportadora y puertos punteros en el mediterráneo. Se trata de un proyecto necesario para el conjunto del Estado, porque en el arco mediterráneo se concentra el 40% del PIB estatal y la mayor parte de las exportaciones, así como una gran parte de la población española.

Son otras muchas las inversiones en infraestructuras que es preciso realizar y constante debe ser la alianza de organizaciones sindicales, empresarios y partidos políticos en demandarlas. Con ese criterio de unidad hemos venido denunciando la infrafinanciación en la Comunitat y aportando soluciones al sistema que no van contra nadie, sino que replantean la necesidad de distribuir los recursos del Estado de modo distinto al actual, dando mayor peso y protagonismo a las Comunidades Autónomas frente a la administración central, ya que como queda dicho, salvo el pilar de las pensiones, todo el Estado del Bienestar recae en las Comunidades Autónomas que tiene la obligación de garantizarlo sin que dispongan de los recursos para hacerlo.

El Estado central ha venido imponiendo exigencias de déficit a las Administraciones autonómicas y locales que no se ha aplicado así mismo, en una actitud injusta y llena de riesgos en términos de cohesión y justicia social. Es el momento de decir basta, hacer visible la situación que padecemos, reconocer que estamos por debajo de la media en renta y que somos relativamente pobres, y mantener la unidad de la sociedad civil valenciana para salir de esta postración que lastra nuestras

posibilidades de futuro y condena a nuestros conciudadanos a padecer menos y peores servicios.

El Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana así lo entiende y con esta iniciativa de divulgación de nuestra situación de infrafinanciación e infrainversiones ayuda a visibilizar el problema, que es el primer paso para encontrar su solución.